

INE/CG674/2020

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAPULHUACÁN, HIDALGO, EL C. SERGIO MELÉNDEZ RUBIO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2019-2020 EN EL ESTADO DE HIDALGO, IDENTIFICADO CON LA CLAVE DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

Ciudad de México, 15 de diciembre de dos mil veinte.

VISTO para resolver el expediente **INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO**.

A N T E C E D E N T E S

I. Auto de vista dictado en el procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente SRE-PSC-19/2020, promovido por el Partido Encuentro Social Hidalgo.

En fecha diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, notificación de la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número de expediente **SRE-PSC-19/2020**, mediante la cual se ordenó dar vista a la autoridad fiscalizadora, remitiendo copia certificada de la sentencia emitida, en atención a la denuncia presentada por el C. Edgar Alvarado Castro, en su carácter de representante propietario ante la Junta Local Ejecutiva de Hidalgo

del Partido Encuentro Social Hidalgo, en contra de TV Cable Chapulhuacán, el programa “Foro Juvenil Chapulhuacán 2020” , el C. José Alfredo Trejo Coronado y en contra de quien resultare responsable, en razón de que con fecha 15 de octubre de dos mil veinte, durante la veda electoral, se transmitió un programa en el canal 34, donde se promocionó indebidamente la planilla de candidaturas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo.

Del análisis realizado a la sentencia de la Sala Regional Especializada destacan los señalamientos contenidos en su Considerando SEXTO, numerales 79 al 93, los cuales consigan consideraciones que podrían constituir una infracción a la normatividad en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, los cuales para mayor claridad se transcriben a continuación:

79. Como vimos, se acreditó que el programa Foro Juvenil Chapulhuacán 2020 se transmitió durante el periodo de reflexión (veda electoral); con ello, la ciudadanía se vio expuesta a contenido con matices electorales, en una etapa de prohibición absoluta.

80. Esto sucedió porque el programa se difundió en el canal 34 de TV Cable Chapulhuacán, el cual cuenta con una concesión para la prestación del servicio de TV restringida.

81. Sabemos que SERRA TV es un canal digital que transmite contenidos de carácter local por medio de una cuenta en Facebook con el mismo nombre “SERRA TV”.

82. En las respuestas que emitió el administrador de este canal digital, José Alfredo Trejo Coronado, señaló que desde el 15 de febrero y 1 de mayo de 2020, solicitó al gerente general de TV Cable Chapulhuacán, le concediera espacio para transmitir las misas dominicales (domingos a las 18:00 horas) y un programa de noticias de nombre “Noticiero Chapulhuacán” (jueves y viernes de 21:00 a 22:00 horas), como se aprecia de las siguientes imágenes:

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

SRE-PSC-19/2020
CHAPULHUACÁN, HIDALGO. A 15 DE FEBRERO DEL 2020.
JIMMY SERRANO GERENTE DE TV CABLE CHAPULHUACÁN
PRSENTE
<p>Por medio de la presente le hago un cordial saludo esperando se encuentre de la mejor forma posible. Quiero aprovechar para felicitar por la labor que realizan en pro del municipio de Chapulhuacán, hidalgo. Del mismo modo aprovecho para solicitar a usted un espacio destinado a través de la señal de Tv por cable para emitir las misas dominicales realizadas en la parroquia de la cabecera municipal.</p> <p>Esta petición la hacemos debido a las solicitudes de la población para transmitir las misas completas debido a la imposibilidad de acudir personalmente a estas prácticas debido a la situación de pandemia que atravesamos.</p> <p>Ruego a usted analizar esta petición que se hace en pro de la ciudadanía en el entendió de la obligación que su empresa tiene de aportar contenidos locales. Sin más por el momento quedo de usted esperando una respuesta a la presente petición.</p>
CHAPULHUACÁN, HIDALGO. A 1 DE MAYO DEL 2020
JIMMY SERRANO GERENTE DE TV CABLE CHAPULHUACÁN
PRSENTE
<p>Por medio de la presente le envío un cordial saludo, esperando se encuentre lo mejor posible. Por medio de la presente quiero hacerle una solicitud para permitimos transmitir otro contenido a través de su señal por cable.</p> <p>Dicho contenido es un programa de noticias llamado Noticiero Chapulhuacán, mismo que cuenta con aproximadamente 50 minutos de duración y ya se transmite en nuestra página de Facebook.</p> <p>Solicitamos a usted un espacio de transmisión los días jueves y viernes a espera de posibles cambios. En el entendido de que esta es una labor en pro de la ciudadanía rogamos a usted tenga a bien otorgarnos su autorización.</p> <p>Quedamos a la espera de su respuesta y agradecemos la atención prestada.</p>

83. Además, José Alfredo Trejo Coronado, precisó que la difusión del programa *Foro Juvenil Chapulhuacán 2020*, el 15 de octubre, se debió a un error en el modo de reproducción de los contenidos; es decir, hay aceptación de esta dinámica del acuerdo de voluntades, pues además hay reconocimiento de esto.

84. Informó que, ordinariamente, para transmitir los contenidos del noticiero y la misa dominical, se incluyen los archivos de video dentro de una memoria USB que posteriormente se conecta a un equipo de DVD.

85. Ahora bien, existe un elemento particularmente relevante, pues de las pruebas del expediente se sabe que José Alfredo Trejo Coronado, administrador del canal digital SERRA TV, fue quien grabó y editó el video del foro juvenil; **persona que a la par era también candidato a primer regidor por la planilla del PRD en Chapulhuacán; donde Sergio Meléndez Rubio era el candidato a la presidencia municipal.**

86. En ese sentido, el hecho que el candidato a primer regidor, sea a su vez la persona que solicitó espacio para transmitir contenido en TV Cable Chapulhuacán, en el cual se difundió un programa con propaganda político electoral, para favorecer a su compañero de planilla, Sergio Meléndez Rubio, lleva a esta Sala Especializada a considerar que se actualizó una adquisición indebida de tiempos en televisión.

✓ *Responsabilidades sobre adquisición*

87. José Alfredo Trejo Coronado - Es directamente responsable porque, como se explicó, fue candidato a primer regidor por el PRD en Chapulhuacán y es la persona que a nombre de SERRA TV, solicitó espacios de transmisión a TV Cable Chapulhuacán; en concreto, porque a través de esta dinámica, se expuso propaganda electoral, durante la veda electoral, en favor de la candidatura a presidencia municipal, que también le favoreció a José Alfredo Trejo Coronado, por ser de su mismo partido.

88. Es decir, su actuar alteró el acceso equitativo a los tiempos oficiales, justamente porque durante el periodo de veda, los partidos políticos y candidaturas tienen prohibido difundir propaganda que pueda influir en la voluntad de las personas electoras, ya que se debe evitar cualquier injerencia o influencia los días previos a la Jornada Electoral, pues la ciudadanía debe decidir el sentido de su voto, con plena libertad.

89. Sergio Meléndez Rubio - Es responsable de manera indirecta, porque aún cuando dijo que no participó en la transmisión del programa Foro Juvenil Chapulhuacán el 15 de octubre, se benefició de esa difusión, porque con ella tuvo una exposición en una etapa que está prohibida, con el riesgo real de incidir o desequilibrar la deliberación de la ciudadanía.

90. Además, no hay elementos en el expediente que permitan advertir que el candidato a la presidencia municipal ejerciera un deslinde oportuno y eficaz respecto a la transmisión del programa, que permita atenuar su responsabilidad.

91. Partido de la Revolución Democrática - Es responsable por su falta al deber de cuidar y vigilar los actos de sus candidaturas, para que se ajustaran a los

principios electorales, toda vez que ambas candidaturas (presidencia municipal y primera regiduría) fueron postuladas por ese partido político y éste no realizó un deslinde oportuno e idóneo al respecto.

92. Finalmente, esta Sala Especializada considera que Tomás Cristóbal Cruz, concesionario de TV Cable Chapulhuacán, también tiene grado de responsabilidad, toda vez que se acreditó que la emisión del programa Foro Juvenil Chapulhuacán 2020, el 15 de octubre, se dio en su espacio de transmisión (señal).

93. Sin que sea una causa que le libere de responsabilidad el hecho que los espacios que José Alfredo Trejo Coronado, como administrador de SERRA TV, solicitó a TV Cable Chapulhuacán, fueran para la transmisión de un noticiero y misas dominicales (jueves, viernes y domingos, respectivamente); porque si bien, no se advierte que la concesionaria tenga intervención en la producción de los contenidos de SERRA TV, en específico el que se difundió el 15 de octubre, lo que se sanciona es que la difusión del Foro Juvenil Chapulhuacán 2020 (programa con contenido electoral en favor de una candidatura, en veda), se dio precisamente en el espacio radioeléctrico que posee TV Cable Chapulhuacán.

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar el procedimiento administrativo oficioso, integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO**, notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral su inicio y publicar el acuerdo con su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de ese Instituto.

III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.

a) El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.

b) El veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se retiraron del lugar que ocupan los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.

IV. Notificación de inicio de procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UF/DRN/12774/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.

V. Notificación de inicio de procedimiento oficioso a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General. El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UF/DRN/12775/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.

VI. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al Partido de la Revolución Democrática.

a) El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/12761/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó y emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO**, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.

b) El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número firmado por el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento señalado en el inciso anterior, manifestando esencialmente lo siguiente:

“(…)

Que por medio del presente escrito, en atención a sus alfanuméricos INE/Q-COF-UTF-12761/2020, estando en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se da contestación al emplazamiento realizado al instituto político que se representa.

VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO

”

El emplazamiento realizado al Partido de la Revolución democrática al presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización, a todas luces resulta ser ilegal, en virtud de que lesiona completamente el debido

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

proceso, consagrado y tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos.

Esto es así en virtud de que, en el oficio de emplazamiento identificado con el INE/Q-COF-UTF-12761/2020, se indica:

[Se inserta transcripción]"

Lo anterior, a todas luces es violatorio al debido proceso, consagrado y tutelado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, pues a simple vista se violan las formalidades esenciales del procedimiento.

Esto es así, en virtud de que, en el oficio de emplazamiento INE/Q-COF-UTF-12761/2020, solamente se conceden al Partido de la Revolución Democrática el término de 24 horas para realizar la contestación al emplazamiento, siendo que el artículo 35, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que se indica en el alfanumérico antes indicado, de manera puntual y específica indica:

[Se transcriben artículos]"

De ésta manera, resulta evidente que el oficio de emplazamiento INE/Q-COF-UTF- 12761/2020, resulta violatorio del debido proceso, en virtud de que artículo 35, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que se cita en el propio oficio, concede a los denunciados en cualquier tipo de procedimiento sancionador en materia de fiscalización, el término de 5 días para que consigan las pruebas necesarias e indispensables para la preparación y la interposición de una adecuada contestación al emplazamiento, actuación con la que se ofrece una adecuada defensa de los intereses del denunciado, siendo éste uno de los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garante del debido proceso, que en el asunto que nos ocupa, deja de observarse.

*Con base en esta cadena argumentativa, es obvia la violación al debido proceso pues, **de los 5 días que concede el artículo 35, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en el oficio de emplazamiento solamente se conceden 24 horas**, término perentorio que además de que no es establecido en la norma reglamentaria, también es insuficiente para la*

preparación de una buena defensa de los intereses del Partido de la Revolución Democrática.

*Igual suerte corre lo relativo al **término de 24 horas**, contados a partir de la notificación del oficio número INE/Q-COF-UTF-12761/2020 para la **expresión de los alegatos**, pues pese a que se invoca el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, resulta evidente la lesión del debido proceso, pues, dicho precepto reglamentario de manera puntual y específica indica que:*

[Se transcriben artículos]"

*En este sentido, conforme a lo establecido en el artículos 35, numeral 2 del Reglamento Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral y contrario a lo sostenido el oficio de emplazamiento, se debe emplazar al denunciado para que en el término de 5 días produzca la contestación a la queja o denuncia, hecho anterior y una vez agotada la investigación por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, dictar el auto de cierre de instrucción ordenar el emplazamiento a alegatos el cual, **debe ser el de 72 horas** y no de 24 horas contados a partir del emplazamiento, como se hace en el oficio de INE/Q-COF-UTF-12761/2020, con el que se emplaza al Partido de la Revolución Democrática al presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización.*

Bajo estas circunstancias, es dable concluir que el oficio de emplazamiento INE/Q-COF-UTF-12761/2020, es violatorio al debido proceso consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículos 35, numerales 1 y 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, siendo éste un elemento suficiente y bastante para determinar la reposición del presente procedimiento en materia de fiscalización concediendo al Partido de la Revolución Democrática la restitución de los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica, audiencia y debido proceso ilegalmente violados.

CONTESTACIÓN DE HECHOS

Si bien es cierto que el presente asunto se base en la sentencia de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020, en la que, a consideración de dicha autoridad jurisdiccional el Partido de la Revolución Democrática es responsable por su falta al deber

de cuidar y vigilar los actos de sus candidaturas, para que se ajustaran a los principios electorales, toda vez no realizó un deslinde oportuno e idóneo al respecto, también lo es que, respecto de dicha determinación, el Partido de la Revolución Democrática, interpuso el medio de impugnación idóneo para contravenir dicha sentencia, tal y como se acredita con la copia del acuse de recibido de dicho medio de defensa legal, que se adjunta al escrito de cuenta, con el que se impugnó dicha sentencia.

Bajo estas circunstancias y dado que la sentencia recaída al Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020, en buena logia jurídica y con base a los principios de legalidad, seguridad jurídica, exhaustividad, congruencia y debido proceso, esa Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto de no incurrir en resoluciones contradictorias, debe esperar a lo que en su momento llegue a determinar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

[Se inserta jurisprudencia]"

En este sentido, esa Unidad Técnica de Fiscalización, principios de legalidad, seguridad jurídica, exhaustividad, congruencia y debido proceso, y para emitir una resolución que se encuentre debidamente fundada y motivada, debe considerar que toda decisión de las autoridades administrativas y jurisdiccionales de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial y en los plazos y términos que fijen las leyes, por ende, la congruencia que debe caracterizar a toda resolución, debe contener la exposición concreta y precisa de la fundamentación y motivación correspondiente, entendiéndose como congruencia externa, al principio rector de toda sentencia, que consiste en la plena coincidencia que debe existir entre lo resuelto, en un juicio o recurso, con la litis planteada por las partes, en la demanda respectiva y en el acto o resolución objeto de impugnación, sin omitir o introducir aspectos ajenos a la controversia y por la congruencia interna, el principio exige que en la sentencia no se contengan consideraciones contrarias entre sí o con los Puntos Resolutivos, es decir, sin que se introduzcan elementos nuevos y ajenos a la controversia o resuelve más allá, o deja de resolver sobre lo planteado o decide algo distinto, incurre en el vicio de incongruencia de la sentencia, lo que permite que las autoridades encargadas de la impartición de justicia, no emitan sentencias contradictorias.

Esto es así, en virtud de que, conforme al medio de defensa legal que interpuso contra lo sentencia de fecha 19 de noviembre del 2020, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020, es factible que sea revocada la

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

misma y en consecuencia la vista ordenada a esa Unidad Técnica de Fiscalización de manera automática queda sin efectos y como consecuencia el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalización debe ser sobreseído.

En este orden de ideas, en el supuesto de que la Unidad Técnica de Fiscalización emita una resolución al presente procedimiento imponiendo una sanción con base en hechos supuestamente probados en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020 y con posterioridad a ello, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emite una sentencia en la que revoque la sentencia del SER-PSC-19/2020, se estaría generando perjuicios de imposible reparación al Partido de la Revolución Democrática, además de incurrir en la irregularidad de emisión de sentencia y/o resoluciones contradictorias.

En este orden de ideas, se cuenta con la certeza jurídica de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque la sentencia Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020, y considere válidamente que el Partido de la Revolución Democrática, no incurrió en culpa invigilando, y que sus candidatos no incurrieron en alguna responsabilidad por la difusión del video catalogado como propaganda político electoral ordenada por personas distintas al Instituto Nacional Electoral, en específico, el programa Foro Juvenil Chapulhuacán 2020.

Esto es así, en virtud de que, en primer lugar, los tiempos en internet de los medios de comunicación, no se encuentran dentro de los catálogos establecidos en el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, dicho precepto constitucional, confiere al Instituto Nacional Electoral, la asignación de tiempos única y exclusivamente respecto de tiempos en radio y televisión, situaciones completamente diferentes e independientes a los de internet, investigados en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020.

Y en segundo lugar, se tiene certeza de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrá determinar que los hechos investigados en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020, no se trata de pautas pagadas, por lo tanto no se genera algún gasto adicional que se tenga que reportar a esa autoridad fiscalizadora.

Esto es así, en virtud de que, esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al analizar las entrevistas materia de investigación en el principal, conforme a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana crítica, podrá arribar a la conclusión de que dichas notas periodística se encuentra amparadas por el derecho de expresión y de prensa, derechos humanos consagrados en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual, la imputación en estudio, a todas luces es infundada.

Como es bien sabido, en el sistema mexicano en los artículos 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentran reconocidos los derechos a la libertad de expresión y a la información, que confieren a los individuos el derecho de expresar su propio pensamiento y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, por ello, el derecho de información protege al sujeto emisor, pero también el contenido de la información, el cual debe estar circunscrito a los mandatos constitucionales ya que si bien es cierto que en la Constitución se establece que en la discusión de ideas, el individuo es libre de expresarlas, también lo es que la libertad de información constituye el nexo entre el Estado y la sociedad, y es el Estado al que le corresponde fijar las condiciones normativas a las que el emisor de la información se debe adecuar, con el objeto de preservar también al destinatario de la información, en tal virtud, la libertad de expresión, en sus dos dimensiones, individual y social, debe atribuirse a cualquier forma de expresión y si bien, no es un derecho absoluto, no deben establecerse límites que resulten desproporcionados o irrazonables.

*En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, en el principio 6, determinó que: "el periodismo" es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento asimismo, estableció: "la actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados; por tanto, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante, **tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un reportero, que por general no están sometidas a la manifestación espontánea que un guion realiza el predeterminado, sino que son emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación anterior.***

En este orden de ideas, también resulta relevante lo establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración de Principios sobre Libertad de expresión, de que la libertad de expresión, "en todas sus formas y manifestaciones" es un derecho fundamental e

inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, que toda persona 'tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma' lo anterior incluye, como se ha señalado, cualquier expresión con independencia del género periodístico de que se trate o la forma que adopte, por ello, ha considerado que "la libertad e independencia de los periodistas es un bien que es preciso proteger y garantizar", por lo que las restricciones autorizadas para la libertad de expresión deben ser las 'necesarias para asegurar' la obtención de cierto fin legítimo.

[Se inserta definición]

De igual manera, en el Manual de géneros periodísticos se recogen las definiciones de diversos autores como Gonzalo Martín Vivaldi, la entrevista es un género en el que se reproduce por escrito el diálogo mantenido por una persona; Miriam Rodríguez Betancourt, la entrevista es el diálogo que se establece entre una persona o varias (entrevistadores) y otra persona o varias (entrevistados) con el objetivo, por parte de los primeros y con conocimiento y disposición de los segundos, de difundir públicamente en un medio de difusión masiva, el contenido de la conversación, por su interés, actualidad y relevancia y Juan Cantavella, la entrevista es la conversación entre el periodista y una o varias personas, con fines informativos (importan sus conocimientos, opiniones o el desvelamiento de la personalidad) y que se transmite a los lectores como tal diálogo, en estilo directo o indirecto".

[Se inserta definición]

*Por lo anterior, el respeto a las libertades de expresión e información es relevante, tratándose de expresiones formuladas como respuesta a una pregunta directa de un reportero, que **por general no están sometidas a un guion predeterminado sino que son la manifestación espontánea que realiza el emisor como respuesta a su interlocutor, con independencia de si la entrevista es resultado de un encuentro casual o producto de una invitación anterior.***

*En tal virtud, declaraciones públicas, formuladas en el contexto de una entrevista, cuyo formato se presenta al público como abierto, no deben restringirse por considerar que el formato de su presentación es, en sí mismo, ilegal o extraordinario, porque la libertad de expresión protege cualquier forma de expresión y de género periodístico, **como lo es en el asunto que nos ocupa.***

En razón a lo anterior, y toda vez que la actividad ordinaria de los periodistas supone el ejercicio de libertades constitucionales, para cuya restricción deben existir intereses imperativos en una sociedad democrática que

requieran salvaguarda y, si bien el principio de equidad en la contienda es uno de tales fines, no toda expresión supone una vulneración a dicho principio, ya que para ello es necesario analizar las circunstancias de cada caso y determinar las consecuencias jurídicas que correspondan, pues, en las contiendas electorales los límites a la libertad de expresión cobran sentido en una sociedad que, por antonomasia, es plural y que posee el derecho a estar informada de las diversas y frecuentemente antitéticas creencias u opiniones de los actores políticos, así como de toda información que, siendo respetuosa de la preceptiva constitucional, es generada al amparo del ejercicio genuino de los distintos géneros periodísticos; por ello, en todo momento se debe reconocer que la función de una contienda electoral es permitir el libre flujo de las distintas manifestaciones u opiniones de los ciudadanos y demás actores políticos, es decir, la existencia de un mercado de las ideas, el cual se ajuste a los límites constitucionales.

En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, los partidos políticos, precandidatos y candidatos, son agentes que promueven la participación ciudadana en la vida democrática, a través de la realización de acciones dirigidas a informar o nutrir la opinión pública, a partir de la exposición de meras opiniones o enteros análisis económicos, políticos, culturales y sociales, que sean el reflejo de su propia ideología y que puedan producir un debate crítico, dinámico y plural, actividad que se realiza en el ejercicio de libertad, y que puede llevarse a cabo por cualquier medio o procedimiento de su elección (artículos 6º, párrafo primero, y 7º, de la Constitución General de la República; 19, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 13, de la Convención Americana de Derechos Humanos), expresando sus opiniones sobre todo tópico, porque no existen temas que, a priori, estén vedados o sean susceptibles de una censura previa, sino de responsabilidades ulteriores, toda vez que se establece un control social o informal de las condiciones y términos en que, preponderantemente, se ejerce el poder público y las actividades con relevancia social de quienes son los depositarios del mismo, así como de aquellos acontecimientos que sean de interés social o general, incluidos, los asuntos más ordinarios que sirvan para conocer las perspectivas u opiniones de un sujeto determinado sobre cualquier tópico, como lo es en el asunto que nos ocupa.

Por lo anterior, de ninguna manera puede ni debe limitarse dicha libertad ciudadana, a menos que se demuestre que su ejercicio trastoca los límites constitucionales, por ejemplo, cuando no se trata de un genuino ejercicio de un género periodístico, y exista una clara y proclive preferencia por un precandidato, candidato, partido político o coalición, o bien, animadversión hacia alguno de ellos, y así lo evidencien las características cualitativas y cuantitativas del mensaje, por ello, el criterio reiterado sostenido por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual no permite posibles actos simulados, a través de la difusión de propaganda encubierta que, sólo en apariencia, sea una entrevista, crónica, reportaje o nota informativa, pero que, en realidad, tenga como propósito promocionar o posicionar a un candidato o partido político, ya que cuando ello ocurre se comete una infracción a la normativa electoral.

Aunado a lo anterior, suponiendo sin conceder que la sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiera subsistente la responsabilidad atribuida a los candidatos del instituto político que se representa. Se tiene la certeza jurídica de que, por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, se va a eliminar la responsabilidad por culpa invigilando que se le imputa en el Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave SRE-PSC-19/2020.

Esto es así, en virtud de que, quedó acreditado que, la transmisión se realizó por error, y una sola vez, incluso no se transmitió completa la grabación, por lo que, el Partido de la Revolución Democrática, no se enteró y en consecuencia, no tuvo oportunidad de actual deslindándose de ella o repudiar la misma.

(...)”

c) El siete de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/13419/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.

d) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.

VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y emplazamiento al C. Sergio Meléndez Rubio (candidato).

a) El veintitrés de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UF/DRN/12762/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización de manera electrónica, notificó el emplazamiento al **C. Sergio Meléndez Rubio, otrora candidato** a la presidencia municipal de **Chapulhuacán, Hidalgo**, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número de expediente **INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO**, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.

b) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.

c) El siete de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/13418/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización de manera electrónica, emplazó al **C. Sergio Meléndez Rubio, otrora candidato** a la presidencia municipal de **Chapulhuacán, Hidalgo**, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente.

d) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.

VIII. Razones y Constancias. Se procedió a realizar una búsqueda vía internet de costos de emisión en televisión y cobertura, en la entidad de Hidalgo con la finalidad de allegarse de elementos que pudieran esclarecer hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el estado de Hidalgo.

IX. Acuerdo de Alegatos. El veintinueve de noviembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos que consideren pertinentes.

Notificación a las partes incoadas:

Partido de la Revolución Democrática.

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12761/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el Acuerdo de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito.

b) El veinticuatro de noviembre de dos mil veinte manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes.

c) El siete de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/13419/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización de manera electrónica, notificó la apertura de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito.

d) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.

C. Sergio Meléndez Rubio, entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Chapulhuacán en Hidalgo.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/12762/2020 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó electrónicamente el Acuerdo de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito.

b) A la fecha del presente no ha formulado Alegatos.

c) El siete de diciembre de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/13418/2020, la Unidad Técnica de Fiscalización de manera electrónica, notificó la apertura de Alegatos del procedimiento administrativo de mérito.

d) A la fecha de la presente Resolución no se ha recibido respuesta.

X. El siete de diciembre de dos mil veinte, a petición de la Dra. Adriana M. Favela Herrera Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, en apego al artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, solicitó retirar del orden del día el punto 10.2, relativo al presente procedimiento, en virtud de encontrarse *subjudice* toda vez que el veintitrés de noviembre de dos mil veinte el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de la sentencia que dio origen al presente, el cual fue registrado con número de expediente **SUP-REP-150/2020**.

Así también el Consejero Electoral Dr. José Roberto Ruíz Saldaña manifestó la necesidad de otorgarse los plazos reglamentarios en la garantía de audiencia a los sujetos incoados. Motivo por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización de conformidad con el artículo 17, numeral 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electora, acordó formular emplazamiento y alegatos al sujeto incoado a efectos de mejor proveer en el procedimiento administrativo de mérito.

Ahora bien, por lo que corresponde al medio de impugnación realizado por el Partido de la Revolución Democrática, el nueve de diciembre de la presente anualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, declaró **infundados los agravios**, toda vez que determinó que la Sala Regional Especializada sí analizó la transmisión de un programa a la luz de la difusión de propaganda electoral en periodo prohibido de lo electoral, y expuso la fundamentación y motivación que consideró aplicable al caso, por lo que ese

Tribunal determinó que en el programa denunciado se efectuó de manera expresa un llamada al voto en favor del partido político y su entonces candidato a la Presidencia Municipal, aunado a que el mensaje se encontraba dirigido a difundir la idea de que se realizarían las mejoras propuestas y beneficios que obtendría dicho Municipio si el otrora candidato llegaba a ocupar el cargo, lo que implicó la difusión de propaganda dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, violando la ley por haberse llevado a cabo durante una veda electoral, o periodo de reflexión.

Por otra parte, la Sala Superior indicó que la responsable sí señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta denunciada, y por las cuales el recurrente estuvo en aptitud de repudiar la conducta desplegada por sus entonces candidatos y por el Concesionario denunciado, a efecto de no incurrir en culpa.

Por último, **declaró infundados e inoperantes** los agravios relativos a la individualización de la sanción, ya que la multa se impuso en razón de la conducta propiamente desarrollada por el recurrente, misma que fue calificada como grave ordinaria y la cual fue correspondida con una sanción proporcional al grado de afectación del bien jurídico tutelado, en esa tesitura, la responsable tomó en cuenta el carácter que debe revestir la misma, ya que si bien es cierto que las sanciones van desde una amonestación pública hasta una multa, también es cierto que la Sala Especializada puede elegir la sanción a imponer, tomando en consideración los elementos acreditados en la conducta, lo cual sucedió en el caso, por lo anterior es que se confirmó la resolución impugnada

XI. Cierre de Instrucción. El dos de diciembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

XII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la tercera sesión ordinaria celebrada el tres de diciembre de dos mil veinte, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización **es competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: *“Los asuntos que se*

encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso **INE/CG174/2020**.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es **“DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL”** y el principio *tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: **“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”**, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG614/2017**.

3. Estudio de fondo.

3.1. Planteamiento de la controversia.

Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo del presente procedimiento.

A partir de los documentos y actuaciones que integran el expediente que por esta vía se resuelve, se desprende que el **fondo** del presente asunto consiste en determinar si el Partido de la Revolución Democrática recibió aportaciones en especie por parte de un ente prohibido o de un socio de una empresa, o en su caso un ingreso no reportado que beneficiaron a su otrora candidato a Presidente Municipal de Chapulhuacán por el estado de Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, por la transmisión en televisión del programa “Foro Juvenil Chapulhuacán”, durante el periodo de reflexión (veda electoral).

En otras palabras, la investigación que hoy se resuelve tuvo por objeto verificar la actualización de la aportación de ente prohibido o un ingreso no reportado con motivo de la difusión de propaganda electoral bajo la modalidad de transmisión de un programa en el canal 34 de TV Cable Chapulhuacán, a favor del otrora candidato a Presidente Municipal de Chapulhuacán por el estado de Hidalgo, el **C. Sergio Meléndez Rubio** y el Partido de la Revolución Democrática.

En razón de lo anterior, deberá colegirse si los hechos controvertidos se subsumen en la hipótesis siguiente:

Hipótesis	Preceptos que la conforman
Aportación de ente prohibido	Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que se encuentra compelido los sujetos obligados, actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.

3.2 Hechos acreditados.

Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones obtenidas tras su adminiculación.

A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y que motivaron la apertura del procedimiento oficioso.
--

A.1. Sentencia SRE-PSC-19/2020, origen de la vista dada a la Unidad Técnica de Fiscalización.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

Con fecha 17 de octubre de 2020, se presentó escrito de queja en contra del PRD y su planilla de candidatura para el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo, denunciando presuntas infracciones a la normativa electoral consistente en la probable transmisión de propaganda electoral en veda electoral o adquisición indebida de tiempos en televisión, hechos que fueron investigados a través de la sustanciación del procedimiento identificado con el número de expediente UT/SCG/PE/PES/JL/HGO/75/2020.

Seguido que fue el procedimiento, el expediente se turnó a la Sala Regional Especializada asignándosele la clave SRE-PSC-19/2020, misma que con fecha 19 de noviembre de la presente anualidad, emitió la sentencia recaída al procedimiento de cuenta, en la cual se determinó medularmente lo siguiente:

- Que el periodo de campaña comprendió del 5 de septiembre al 14 de octubre, ambos del año dos mil veinte y, la fecha para la Jornada Electoral, el 18 siguiente, por tanto, el periodo de reflexión abarcó del 15 al 18 de octubre.
- Que cuando se llevó a cabo el *Foro Juvenil Chapulhuacán 2020* y se grabó el programa, pudiera catalogarse como un ejercicio válido de libertad de expresión del medio, pero lo cierto está en que el ilícito radica cuando el programa salió al aire en televisión en tiempo en el cual, programas con contenido de la especie electoral a favor de una fuerza política y su candidatura no se justifican; por lo cual, la violación se materializó al proyectarlo en televisión justamente en la etapa de veda electoral, cuando existe prohibición para ello.
- Que se tienen elementos suficientes para concluir que se expuso contenido electoral en el periodo de reflexión (veda electoral).
- Por tanto, se configura una adquisición indebida de tiempo en televisión cuando se demuestre que una persona adquiere dichos tiempos o difunda contenido, al margen de los administrados por el INE, para favorecer a una fuerza política o candidatura, con independencia que exista algún vínculo contractual entre la parte beneficiada y quien solicitó la transmisión.
- Existe un elemento particularmente relevante, pues de las pruebas del expediente se tiene que José Alfredo Trejo Coronado, administrador del canal digital SERRA TV, fue quien grabó y editó el video del foro juvenil; persona que a la par era también **candidato a primer regidor por la planilla**

del PRD en Chapulhuacán; donde Sergio Meléndez Rubio era el candidato a la presidencia municipal.

- En ese sentido, el hecho que el candidato a primer regidor sea a su vez la persona que solicitó espacio para transmitir contenido en TV Cable Chapulhuacán, en el cual se difundió un programa con propaganda político electoral, para favorecer a su compañero de planilla, Sergio Meléndez Rubio, lleva a considerar que se actualizó una adquisición indebida de tiempos en televisión.

Es de mencionar que dicha sentencia fue impugnada por el Partido de la Revolución Democrática, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral de Electoral del Poder Judicial de la Federación, asignándole el número de expediente con clave **SUP-REP-150/2020**, seguidos que fueron los trámites, el nueve de diciembre de dos mil veinte, la mencionada Sala Superior emitió sentencia en el sentido de **confirmar** la sentencia recurrida.

B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento administrativo.
--

B.1. Documental pública, consistente en razón y constancia (Instituto Federal de Telecomunicaciones).

Quedó cabalmente acreditada la adquisición de tiempos de televisión, por la transmisión de propaganda electoral a través del canal 34 de TV Cable Chapulhuacán, mismas que giran en torno a un punto central: la planilla de candidatura de Sergio Meléndez Rubio y el Partido de la Revolución Democrática, en Chapulhuacán, Hidalgo.

Ahora bien, mediante razón y constancia, se consultó la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones “IFT”, a efectos de consultar los datos abiertos de aquellos registros de concesiones de la *“Infraestructura de estaciones de TV”* con fecha de datos al 23 de noviembre de 2020, donde fue localizado el registro de 5 concesionarias en el Estado de Hidalgo, las cuales se enuncian a continuación:

- Televimex, S.A. De C.V.
- Televisión Azteca, S.A. De C.V.
- **Gobierno del Estado De Hidalgo.**
- Cadena Tres I, S.A. De C.V.

- Universidad Autónoma del Estado De Hidalgo.

B.2. Documental pública consistente en razón y constancia (Gobierno del Estado de Hidalgo)

Se consultó la página oficial del estado de Hidalgo (www.hidalgo.gob.mx), a efecto de localizar si existían datos sobre los costos de contratación de espacios publicitarios en televisión.

Por lo anterior y de la consulta realizada al menú Radio y Televisión Hidalgo, se localizó un submenú “Servicios”, entre los cuales se encuentran los siguientes:

The screenshot shows the 'Servicios' (Services) section of the Hidalgo government website. The header includes the logo 'hidalgo.gob.mx' and navigation links: Gobierno | Trámites y Servicios | Hidalgo Travel | Transparencia | Buzón Ciudadano. Below this, a sub-header reads 'Radio y Televisión de Hidalgo' with links to Información Institucional, Hidalgo Televisión, Hidalgo Radio, Transparencia, and Servicios. The main content area is titled 'Servicios' and lists six options in a grid:

Televisión patrocinio Patrocinio en televisión por un espacio al aire.	Televisión súper 10 segundos Elaboración de súper para televisión con duración de 10 segundos, se localiza en la parte baja de la pantalla, tiene fondo y animación, puede incluir logotipos, direcciones, teléfonos, etc.	Televisión cintillo 10 segundos Elaboración de cintillo para televisión con duración de 10 segundos, se ubica en la parte baja de la pantalla y contiene palabras en movimiento de izquierda a derecha.
Radio patrocinio Realiza un Patrocinio en radio.	Radio producción Realiza una producción en Radio.	Televisión entrevista Entrevista en televisión con duración aproximada de 5 minutos.

Por lo anterior, se procedió a ingresar al menú denominado “Televisión entrevista”, a fin de obtener una cotización sobre la difusión de la entrevista realizada en el estado de Hidalgo, de lo anterior, fue posible localizar una cotización por el concepto de “*entrevista en televisión con duración aproximada de 5 minutos*”, dirigido a todo el público, con un costo de \$1,500 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.), precio actualizado al ejercicio 2020 y regulado por los artículos 14 Capítulo VII, Decreto de creación de Radio y Televisión en Hidalgo, Artículo 88 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Cuotas y Tarifas del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal denominado “Radio y Televisión de Hidalgo”.

C. Valoración de las pruebas y conclusiones.

C.1 Reglas de valoración

De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización¹ serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos.

El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre los hechos investigados.

Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultades, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.

Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.

C.2 Conclusiones.

Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas.

I. El instituto político recibió una aportación de ente prohibido por la adquisición de tiempo en televisión durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el estado de Hidalgo.

¹ En adelante, Reglamento de Procedimientos.

Tal y como fue establecido por la Sala Regional Especializada, el **C. José Alfredo Trejo Coronado** (entonces integrante de la planilla a Presidencia Municipal), fue el responsable primigenio en razón de ser el operador del *espacio televisivo*, a través del cual se difundió la propaganda electoral materia de análisis.

Empero, la autoridad jurisdiccional estableció de manera patente, que la difusión de la propaganda electoral atendió a que el C. José Alfredo Trejo Coronado solicitó al *canal televisivo*, tiempo o espacio de transmisión a través del cual se transmitió, durante la veda electoral, contenido que se consideró benéfico para el instituto político y su candidatura a Presidente Municipal.

Por tanto, como se concluyó en aquella determinación jurisdiccional, fue a través de la concesión televisiva de *TV Cable Chapulhuacán*, mediante la cual se materializó la transmisión de propaganda político electoral.

En esa tesitura, se tiene que el Partido de la Revolución Democrática recibió una aportación de ente prohibido por la adquisición de tiempo en televisión, debido a que obra en el expediente de mérito, la difusión de propaganda electoral, durante el periodo de veda, a través del canal 34 de *TV Cable Chapulhuacán*, es decir, se transmitió propaganda en televisión que influyó en las personas receptoras días previos a la Jornada Electoral, en beneficio de la planilla de candidatura del PRD en el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo.

Por tanto, por efectos de eficacia refleja se tiene por configurada la aportación de ente prohibido, toda vez que como quedó debidamente acreditado en la sentencia SRE-PSC-19/2020, se estableció la transmisión del programa “Foro Juvenil Chapulhuacán” con una duración total de 1 hora con 08 minutos, y que a partir del minuto 33:15 se visualiza al entonces candidato en el foro juvenil, portando un chaleco amarillo con la leyenda visible “PRD”, y que a partir del minuto 33:54 el C. Sergio Meléndez Rubio, en su carácter de candidato, comenzó a interactuar con las y los jóvenes asistentes, situación que se determinó como contraria a la normatividad electoral, pues dicha difusión en veda electoral generó una ventaja indebida frente a los demás contendientes de la justa comicial local de mérito.

Se afirma lo anterior, toda vez que, en el programa transmitido se advierte la participación del entonces candidato con las y los jóvenes y una entrevista que en el punto central *invita a que el 18 de octubre salgan a las urnas a votar por el PRD y por la candidatura de Sergio Meléndez Rubio*; elementos característicos que tornaron al **contenido como esencialmente de naturaleza política y electoral**.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

No obstante, dicho contenido fue expuesto en la sentencia que dio origen al procedimiento que nos ocupa, se retoman elementos indispensables -imágenes y transcripción de audio- que proporcionan mayor claridad en la controversia que se dilucida -Foro Juvenil Chapulhuacán-, véase:

Imágenes representativas	Descripción/audio
Presentación	
 <p>YOSADARA BALLATO</p>	<p><u>Minuto 00:30</u> <i>"...tenemos preparado un programa muy importante en el cual se hizo una convocatoria para todos los candidatos a participar en este foro de jóvenes que quieren también participar en la política de nuestro pueblo. <u>El profesor Sergio Meléndez</u> quien accedió a participar y los jóvenes, los más importantes que es para ellos, aceptaron a participar en este foro tan importante, por eso estamos a unos minutos de comenzar, vamos, acompáñenme..."</i></p>
Artista local – cantante "masacre verbal"	
	<p>Música <u>Minuto 03:55 – 7:12</u></p>
Conferencista Juan Carlos González	
	<p><u>Minuto 19:20</u> <i>"...son cuestiones que <u>platicando con mi amigo Sergio</u>, que yo lo respaldo porque lo conozco y es una persona que, yo por eso vengo, porque nos escucha, porque está interesado, porque anota, porque dice voy a hacer esto, porque yo no voy a estar sentado ahí en la silla en el aire acondicionado, sino que me voy a salir a escuchar a la gente y sobre todo hacer cosas..."</i></p>



Minuto 23:20

"...ahora ven gente nueva, porque siempre, siempre están los mismos, entonces jóvenes yo no les voy a quitar mucho tiempo, esto solamente era una pequeña introducción, va está por llegar Sergio, vamos a hacer una pequeña dinámica...vamos a hacer tres grupitos...les voy a pasar una hoja a cada quien y un lapicero, el grupo de este lado va a ser el grupo uno, el grupo dos y el grupo tres el de allá, este grupo el uno va a poner de tres a cinco propuestas sobre turismo y cultura, tienen 15 minutos, para concentrarse y ponerse de acuerdo y van a nombrar un representante, que ese representante es el que se las va a exponer ahorita a Sergio cuando lleque va, este otro grupo chicas super poderosas les vamos a llamar, van a poner de tres a cinco propuestas que tengan con ver con juventud con empoderamiento juvenil, con lo que les ocurra de juventud va, y el de allá atrás que son más hombres, más machos, vamos a ponerles los super poderosos, van a hacer de tres a cinco propuestas sobre deporte..."



Comerciales

Dinámica de grupos



Minuto 33:20 – 33:51



Jóvenes realizando una actividad

Cintillos: "los jóvenes se reunieron en equipos para pensar sus propuestas y exponerlas al candidato invitado del 1er foro juvenil."

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

	<p><u>Minuto 33-54 – 44:22</u></p> <p>El candidato Sergio Meléndez escuchó las propuestas de las y los jóvenes.</p>
Uso de la voz del candidato	
	<p><u>Minuto 45:33</u></p> <p><i>"ayer que hubo, hubo el mitin aquí en el barrio de la estación, yo le platicaba ahí, a las personas que nos acompañaron, Sergio no es un candidato, no es una persona que venga a decirles hoy con palabras, de lo que quiere hacer por los jóvenes, por el municipio de Chapulhuacan, Sergio es una persona, que ya ha demostrado, a lo mejor teniendo un puesto insignificante si ustedes quieren, que se preocupa por esas necesidades que la gente tiene, que los jóvenes tienen"</i></p>
	<p><u>Minuto 51:04</u></p> <p><i>"...también Sergio Meléndez será, un presidente, si es que echamos ganas, porque si no, nos ganan, nos van a dar la vuelta, pero no, vamos muy bien, yo creo que vamos muy bien, no hay que bajar la guardia, simplemente de aquí al dieciocho de octubre, no hay que bajar la guardia"</i></p> <p><u>Minuto 52:45</u></p> <p><i>"...y claro que en la presidencia municipal, habrá jóvenes trabajando, claro que muchos"</i></p>

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

	<p><i>espacios de la presidencia estarán ocupados por jóvenes, y claro que le inyectaremos esa energía"</i></p> <p><u>Minuto 55:28</u> <i>"...Sergio Meléndez va a ser la persona que la Presidencia, que si el pueblo nos permite llegar ahí, va a hacer la gestión, va a tener un grupo de personas que se vayan a Pachuca, que se vayan a México para gestionar esos proyectos, esos recursos y de esa manera explotar nuestros lugares turísticos..."</i></p> <p><u>Minuto 1:08:36</u> <i>"...ya los jóvenes analizan más, tienen más visión y si eligieron a Sergio Meléndez de candidato es porque algo bueno le vieron..."</i></p>
Entrevista	
	<p><u>Voz de la presentadora:</u> <i>"...Profe ya para terminar, porque sabemos que está usted muy ocupado en estos últimos días de campaña, ¿Cuál sería ese mensaje importante que usted les daría a nuestros amigos Chapulhuacanenses, a nuestros amigos televidentes, y a todo ese, esas personas que están ahí al pendiente de usted?"</i></p> <p><u>Voz de Sergio Meléndez Rubio:</u> <i>"...Que sigamos como un pueblo unido, como un municipio unido, que sigamos organizados y que solamente así podremos sacar a nuestro municipio de esta situación en la que se encuentra, <u>yo los invito nuevamente a que el dieciocho de octubre todos salgamos a las urnas a votar por el PRD, a votar por Sergio Meléndez, a votar por ese desarrollo que necesita nuestro municipio de Chapulhuacan...</u>"</i></p>

Por tanto, ante la concurrencia de los elementos característicos expuestos, la autoridad jurisdiccional estableció que el contenido atinente revistió el carácter de propaganda política electoral, en beneficio del PRD y su entonces candidato al cargo de Presidente Municipal en Chapulhuacán, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020 de la entidad en cita.

Lo anterior, en virtud de los efectos de la institución jurídica de *eficacia refleja de cosa juzgada*, actualiza un reproche de tipo administrativo en materia de fiscalización, esto es, un beneficio propagandístico cuyo origen encuentra identidad con una entidad moral.

II. Garantía de audiencia al sujeto investigado.

Por cuanto hace a las manifestaciones del sujeto obligado en torno a los plazos concedidos en la etapa de emplazamiento y alegatos, consistente en 24 horas cada uno, esta autoridad estima que en el caso que nos ocupa, las reglas procedimentales que rigen el procedimiento en la materia contemplan hipótesis de hecho ordinarias y generales, y no así, casos específicos en los cuales, a la luz del contexto circunstancial, ha lugar a emitir determinaciones que busquen proteger y prevalecer los principios sobre los cuales descansa nuestro sistema electoral.

En el caso, como ha sido expuesto, el procedimiento que se resuelve encuentra relación con la etapa de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario en el estado de Hidalgo, cuyos candidatos electos aún no toman posesión del cargo contendido, y el proceso electivo se encuentra aún bajo un marco de revisión y control jurisdiccional.

Por tanto, la pronta resolución del asunto que nos ocupa torna necesaria la adopción de emisión de actos de autoridad que, sin dejar de garantizar el derecho de audiencia, permita sustanciar y resolver los procedimientos atinentes en un marco temporal compatible con la etapa del proceso electivo en que nos encontramos.

En efecto, si bien es cierto el Reglamento de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización prevé plazos perentorios de 5 días y 72 horas en relación a la etapa de emplazamiento y alegatos, respectivamente; también lo es que dicha previsión normativa encuentra compatibilidad con escenarios ordinarios y no así con marcos temporales reducidos en los cuales subyace la necesidad de instruir los procedimientos en plazos de tiempo ajustados.

Por tanto, esta autoridad consideró necesario el otorgamiento y notificación de las respectivas etapas de garantía de audiencia bajo un plazo perentorio menor al establecido en la norma reglamentaria (medida adoptada en precedentes firmes²), a efectos de no soslayar el derecho de las partes de ser oídas en los procedimientos seguidos a manera de juicio.

Ahora bien, a juicio de esta autoridad, la medida adoptada no causó perjuicio alguno al sujeto obligado pues, como obra en autos, este estuvo en aptitud de rendir su defensa que conforme a su derecho conviniera, circunstancia que en la especie aconteció.

No obstante, lo anterior el siete de diciembre de dos mil veinte, y en razón de los argumentos expuestos en la Sesión de Consejo General por los cuales el presente Proyecto de Resolución fue retirado del orden del día; se otorgó a los sujetos incoados, garantía de audiencia, sin embargo, a la fecha de elaboración de la presente Resolución no fue presentada respuesta al emplazamiento y etapa de alegatos formulados por la autoridad electoral.

En consecuencia, a consideración de este Consejo General, la medida adoptada guarda compatibilidad con los principios que rigen la función electoral, en concreto, con la procuración y otorgamiento de certeza a los procesos electorales, al permitir que estos concluyan con cifras consolidadas respecto de los ingresos y egresos que acontecieron durante el desarrollo de las campañas electorales.

3.3 Estudio relativo a la aportación de ente impedido.

A. Marco normativo.

La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos; mismos que a la letra determinan:

Ley General de Partidos Políticos

“Artículo 25.

1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(...)

² Mismo criterio fue realizado en el acuerdo INE/CG512/2019, aprobado por este Consejo General.

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;(...)"

"Artículo 54.

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:

a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;

c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;

d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;

e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;

f) Las personas morales, y

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero."

B. Caso particular.

El análisis a los hechos acreditados, permite a este Consejo General resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:

Como fue expuesto en el apartado de conclusiones, se tiene por acreditado en razón de la institución de eficacia refleja de cosa juzgada, el hecho que el Partido de la Revolución Democrática recibió una aportación de ente prohibido por concepto de otorgamiento de tiempo en televisión, en razón de la difusión de propaganda electoral durante el periodo de veda, a través del canal 34 de *TV Cable Chapulhuacán*, es decir, se transmitió propaganda en televisión susceptible de influir en los electores días previos a la Jornada Electoral, en beneficio de la planilla de la candidatura del PRD en el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo.

Ahora bien, conforme se desprende del artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de rechazar apoyos, entre otros, de la especie propagandísticos proveniente de entes impedidos para tales efectos.

En conjunción con dicha obligación, el artículo 54 del mismo ordenamiento enlista una serie de entes impedidos a efecto de proporcionar o realizar aportación alguna en beneficio de los sujetos obligados, en los cuales se encuentran las personas morales -inciso f)-.

Por tanto, los hechos acreditados en la sentencia de origen, encuentran correspondencia con las hipótesis de hecho previstas por los artículos en estudio, actualizando la hipótesis de derecho regulada así como las consecuencias de derecho derivadas.

En conclusión, a juicio de este Consejo General, los hechos materia de la vista de origen evidencian una transgresión por parte del Partido de la Revolución Democrática a los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que ha lugar a determinar como **fundado** el presente procedimiento.

C. Determinación del monto derivado del beneficio obtenido.

Cabe precisar que el beneficio obtenido por el tiempo total del programa que se difundió, si bien ostenta una duración total de 1 hora con 8 minutos, el tiempo efectivo de aparición y proyección de la imagen del candidato asciende a un total de **35 minutos**, periodo de tiempo que se tomara como base de cálculo.

Ahora bien, como fue expuesto en los elementos de prueba recabados, esta autoridad se allegó de cotizaciones públicas por concepto de adquisición de tiempo en televisión, en concreto, la cotización hallada en la página oficial del estado de Hidalgo de televisoras restringidas (por cable).

Derivado de la información proporcionada, resulta de vital importancia señalar que como es de explorado derecho el acceso y uso de los medios de comunicación al cual tienen derecho los sujetos obligados, es administrado únicamente por la autoridad electoral.

Una vez señalado lo anterior, y toda vez que la autoridad fiscalizadora no cuenta, entre los conceptos que conforman su matriz de precios, de elementos objetivos que permitan fijar un valor estimado de adquisición -dada la prohibición de los sujetos obligados de adquirir tiempo en televisión-, esta autoridad procedió a allegarse de elementos objetivos que permitieran materializar la pretensión de valuación.

Ahora bien, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, con la finalidad de establecer costos estimados de los egresos no reportados, se **podrán obtener y utilizar como factor de cálculo, las cotizaciones que proporcionen otros proveedores que ofrezcan los servicios o bienes de que se trate**; asimismo en apego con lo dispuesto en la NIF A-6 (Reconocimiento y valuación)³, esta autoridad se encuentra en aptitud de establecer (por sí misma) una estimación de costo. De tal suerte que se procedió a determinar el costo razonable respecto a la adquisición de tiempo de difusión en televisión bajo un factor de cálculo de **treinta y cinco minutos**.

Al respecto, en razón de la consulta a la página oficial del Gobierno del estado de Hidalgo, se obtuvo un elemento objetivo de cálculo de la especie *costo de contratación de tiempo en televisión* vigente en el año 2020, sobre la base de costo de **5 minutos** de adquisición de tiempo en televisión por concepto de *entrevista*, el cual asciende a una cantidad de **\$1,500 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**.

Por lo tanto, tomando en consideración que la transmisión en televisión tuvo una duración efectiva de **35 minutos**, el desarrollo de la operación aritmética arroja un valor total estimado de **\$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**.

D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de conformidad con los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, mismos que ya han sido analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a **la aportación en especie de tiempos de televisión por la difusión de un programa con contenido de propaganda electoral**, en beneficio del Partido de la Revolución Democrática, así como su entonces candidato Sergio Meléndez

³ De conformidad con el Reglamento de Fiscalización que rigió en el ejercicio dos mil doce, las Normas de Información Financiera (NIF) se utilizaron en la auditoría a las finanzas de los partidos políticos, de conformidad con el artículo 355 de dicho ordenamiento, mismo que establecía que *"la auditoría a las finanzas de los partidos políticos consistirá en la revisión del cumplimiento de los requisitos en materia de origen y aplicación de los recursos señalados en el Código, en el Reglamento, en las NIF'S, así como de los ordenamientos legales que regulen las operaciones que realicen los partidos."* De igual manera, cabe señalar que el empleo de las NIF'S para calcular el costo promedio o razonable de bienes y servicios, fue utilizado por esta autoridad al resolver el expediente identificado como Q-UFRPP 61/09, mediante resolución CG22/2012.

Rubio al cargo de Presidente Municipal de Chapulhuacán, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, en el Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes siguientes:

- 1) Informes del gasto ordinario:
 - a) Informes trimestrales
 - b) Informe anual
 - c) Informes mensuales
- 2) Informes de Proceso Electoral:
 - a) Informes de precampaña
 - b) Informes de obtención de apoyo ciudadano
 - c) Informes de campaña**
- 3) Informes presupuestales:
 - a) Programa Anual de Trabajo
 - b) Informe de Avance Físico-Financiero
 - c) Informe de Situación Presupuestal

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es*

responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,

obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.⁴

Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, imponen a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos, obligados solidarios.

El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y

⁴ Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con la conducta irregular, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les corresponde.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

En el caso concreto, se acredita la responsabilidad del entonces candidato incoado de manera indirecta, en virtud de que éste toleró una aportación en especie, como lo es la adquisición de tiempo en televisión, ya que se benefició de esa difusión, porque con ella tuvo una exposición en una etapa que está prohibida, con el riesgo real de incidir o desequilibrar la deliberación de la ciudadanía.

En este sentido, cabe decir que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en especie por un ente impedido), mandata a los sujetos obligados de abstener de aceptar toda clase de apoyo propagandístico, económico y/o político proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos; lo cual, en la especie no se observó.

Por otra parte, resulta relevante precisar que en caso de existir una violación por parte de una persona física o moral a las disposiciones electorales, la responsabilidad de los entes políticos, y sobre el particular, del Partido de la Revolución Democrática, es el deber de cuidar y vigilar los actos de sus candidaturas, para que se ajusten a los principios electorales, toda vez que ambas candidaturas (presidencia municipal y primera regiduría) fueron postuladas por ese partido político y éste no realizó un deslinde oportuno e idóneo al respecto.

Ahora bien, es de señalar que el orden administrativo sancionador electoral, ha retomado esta institución jurídica de la responsabilidad, poniendo especial énfasis a la culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante de los

partidos políticos, ya que pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, al ser vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus fines.

Por lo anterior, resulta un hecho notorio que el Partido de la Revolución Democrática, tuvo conocimiento de la adquisición de tiempo en televisión, y sin embargo no realizó una acción tendente a deslindarse de la conducta infractora.

En ese sentido el partido incoado incurrió en una conducta omisiva al no repudiar o deslindarse de la conducta ilegal que desplegaron sus entonces candidatos en el municipio de Chapulhuacán, aunado a que éste ya había sido sancionado por adquirir tiempo en televisión del presente procedimiento lo cual implica la aceptación de sus consecuencias y posibilita la sanción al partido.

Por tanto, al mostrar una conducta pasiva y tolerante, así como al no actuar diligentemente se entiende que el Partido de la Revolución Democrática incurrió en responsabilidad, al tolerar que el otrora candidato en comento recibiera la aportación de tiempo en televisión, mismo que se tradujo en beneficio de la campaña.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora al Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

4. Individualización de la sanción.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar la falta (inciso **A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (inciso **B**).

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió rechazar una aportación de persona impedida por la normatividad electoral, misma que corresponde a una **omisión** que vulnera lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.⁵

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de los sujetos obligados consistente en haber incumplido con su obligación de garante, al haber tolerado la aportación en especie de tiempo en televisión, en beneficio de la campaña del entonces candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chapulhuacán por el estado de Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio.

⁵ Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003, en donde estableció que la acción se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo, en cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

El sujeto obligado obligados toleraron la aportación en especie de tiempo en televisión por transmisión en el canal 34 de TV Cable Chapulhuacán, en beneficio de la campaña del entonces candidato a Presidente Municipal de Chapulhuacán por el estado de Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, de ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.

Dicha irregularidad se en el estado de Hidalgo, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el procedimiento administrativo oficioso.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.⁶

El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

⁶ “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (...) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; (...)”.

“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.

Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa electoral.

Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo que permite precisamente la fiscalización.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida en la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real a los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en el origen lícito de los ingresos del sujeto obligado.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.⁷

En esta tesitura, debe considerarse que el partido **de la Revolución Democrática** cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga, ya que mediante los acuerdos **IEEH/CG/036/2019 e IEEH/CG/254/2020**, aprobados por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en sesiones públicas de fechas treinta de octubre de dos mil diecinueve y trece de octubre de dos mil veinte, respectivamente, determinó el monto y la distribución del financiamiento público a otorgarse en el ejercicio 2020 para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos acreditados y con registro ante ese organismo electoral, quedando de la siguiente manera:

PARTIDO POLÍTICO	FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PARA EL 2020	
	ENERO A SEPTIEMBRE	OCTUBRE A DICIEMBRE
Partido de la Revolución Democrática	\$4,104,053.33	\$1,005,493.07

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral.

⁷ Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos del Organismo Público Local Electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al PRD, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas a octubre de 2020	Monto por saldar	Total
PRD	INE/CG465/2019	\$624,759.07	\$0.00	\$624,759.07	\$624,759.07
Total					\$624,759.07

En este sentido, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que el Partido de la Revolución Democrática, al mes de octubre de dos mil veinte, si bien tiene saldos por pagar, los mismos son menores a la cantidad de ministración del financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias de ese instituto político, por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción que se imponga, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente Resolución.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado incumplió con su obligación de garante, al haber tolerado la aportación en especie de tiempo en televisión, en beneficio de la campaña del entonces candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chapulhuacán por el estado de Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, durante la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, por parte de una persona no permitida por la normativa electoral, a saber, TV Cable Chapulhuacán.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir rechazar una aportación proveniente de persona impedida, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado asciende a la cantidad de **\$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.⁸

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II del artículo en comento consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el ente político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **200% (doscientos por ciento)** sobre el monto involucrado \$10,500.00 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de **\$21,000.00 (veintiún mil pesos 00/100 M.N.)**.⁹

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al **Partido de la Revolución Democrática** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II¹⁰ de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **241 (doscientas cuarenta y un) Unidades de Medida y Actualización** vigentes para el dos mil veinte, equivalente a **\$20,938.08 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 08/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de

⁸ Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

⁹ Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización.

¹⁰ Criterio de sanción establecido en la aprobación del dictamen y resolución, así como las quejas vinculadas al Proceso Electoral Local Ordinario en la entidad de Hidalgo, en la sesión ordinaria celebrada el día 26 de noviembre del 2020.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

5. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie *aportación de ente impedido*, se tiene que la cantidad correlativa debe ser asociada al saldo de egresos finales de la campaña desarrollada en el municipio de Chapulhuacán, Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019 – 2020 en la entidad federativa en cita y postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

En este orden de ideas se tiene que, realizado el ejercicio de asociación de la cantidad involucrada correlativa, se obtiene el siguiente resultado:

Candidato	Cargo	Egresos finales (Dictamen consolidado INE/CG615/2020 (A))	Monto susceptible de sumatoria (B)	Egresos finales (C) = (A) + (B)	Tope de gastos de campaña (D)	Diferencia (E) = (D) – (C)
C. Sergio Meléndez Rubio	Presidente Municipal de Chapulhuacán.	\$178,205.25	\$10,500.00	\$188,705.25	\$195,802.06	\$7,096.81

Por lo anterior, se advierte que en el presente procedimiento sancionador oficioso no se actualiza el rebase al tope de gastos de campaña asignado a la entonces candidatura del C. Sergio Meléndez Rubio, por el cargo a Presidente Municipal de Chapulhuacán, en el marco del Proceso Electoral Local 2019-2020, en Hidalgo.

6. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó la **notificación electrónica** de las actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma

implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo electrónico.

Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de notificación la realizada “vía electrónica”.

Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su instituto político.

7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

8. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso. En atención a que se tiene por acreditado que la concesionaria de Televisión denominada “TV Cable Chapulhuacán” realizó una aportación de tiempos en televisión al otrora candidato investigado, conducta que resulta contraria a lo permitido por la norma electoral toda vez que dicha persona moral es un ente prohibido para realizar aportaciones a los sujetos obligados en materia de fiscalización. Por consiguiente, lo procedente es dar **vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso** de este Instituto para que en ejercicio de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se declara **fundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática y su otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chapulhuacán, Hidalgo, el C. Sergio Meléndez Rubio, de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

SEGUNDO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el **considerando 4** de la presente Resolución, se impone al **Partido de la Revolución Democrática** una sanción consistente en una multa equivalente a **241 (doscientas cuarenta y un) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil veinte, equivalente a \$20,938.08 (veinte mil novecientos treinta y ocho pesos 08/100 M.N.).**

TERCERO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando **6** de la presente Resolución.

QUINTO. De conformidad con lo expuesto en el **considerando 5** de la presente Resolución, se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, **cuantificar** el monto de **\$10,500 (diez mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, al monto de egresos finales de campaña del C. Sergio Meléndez Rubio, otrora candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chapulhuacán, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020, en el estado de Hidalgo.

SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de almacenamiento digital en un **plazo no mayor a 24 horas** siguientes a su aprobación.

SÉPTIMO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

CONSEJO GENERAL
INE/P-COF-UTF/75/2020/HGO

OCTAVO. Se ordena se dé vista a la autoridad señalada en el considerando **8** de la presente Resolución.

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 15 de diciembre de 2020, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA**